



¿Ahora contra la ciencia?

La Jornada, 26 de septiembre de 2021

Esta nota fue escrita bajo el dolor que me causa el deceso de mi querido amigo Julio Labastida. Hombre comprometido con la democracia, el estudio, el saber y otras causas fundamentales de nuestro país. Mi solidaridad y cariño con Patricia y los suyos.

Nuestra preocupación y ocupación política principal debería ser entender y atender la pérdida histórica del dinamismo económico que, junto con el extravío del bienestar, conforma el eje de la imagen del México actual. Pero no lo es. Los grupos dirigentes del Estado están en otros asuntos y las carencias de la sociedad quedan fuera del radio de quienes encabezan el gobierno federal.

El embate inaudito del gobierno y el presidente contra científicos reconocidos y respetados por su comunidad y más allá de ella, revela que el extravío no es sólo material o de subsistencia sino cultural. En lugar de enaltecer el trabajo sostenido en investigación, en ciencia y tecnología, el presidente decide acompañar a la Fiscalía en su delirio persecutorio y hace a un lado lo que desde sus propios flancos le recomiendan. En vez de prudencia y cautela hay cargos e insidias, y en lugar de respeto por el compromiso científico, la base del desarrollo económico, técnico y cultural de las naciones, tenemos comentarios calumniosos vertidos desde el púlpito mayor de la República.

La conducta gubernamental y de parte de su coalición es nugatoria del trato republicano y del todo opuesta a cualquier idea sensata o ilustrada sobre el progreso de las naciones. Recuerda, maldita sea, las cargadas estalinistas contra médicos, intelectuales y científicos que, en muchos casos, resultaron en acciones criminales por parte del propio Estado de los soviets. Una negación histórica que empezó por el desprecio del poder por la cultura, hasta llevar



a su país al deterioro intelectual, pero también económico y social, hasta la decadencia de un Estado que presumía de legitimidad histórica.

Poner contra la pared o en la picota a una parte de la comunidad académica y científica nacional, a partir de un desvarío y una acusación inconcebible, como los calificara el rector Enrique Graue, no sólo agrede alevosamente a esas comunidades sino a quienes ven en esas profesiones y empeños una esperanza, débil si se quiere verla así, en una evolución política del pueblo mexicano pacífica y civilizada, basada y comprometida con la razón y el respeto a los demás. Empezando por quienes no comparten nuestras ideas y visiones. Muchos años han sido necesarios para que la actividad científica sea respetada y, sobre todo valorada y tomada en cuenta por sus hallazgos y potencialidades de mejoras humanas.

Para nuestra fortuna, la falta de respeto y el pobre entendimiento social de sus promesas, debido a sistemas educativos y comunicativos poco eficaces, se corrigió y habíamos llegado a un sistema de trabajo y comunicación promisorio y capaz de hacerse presente en la deliberación nacional. Pero, el menosprecio que parecía superado o en vías de hacerlo, ha aterrizado en un muro lamentable, construido desde los núcleos de mando y dirección del gobierno que amenaza contaminar los espacios del Estado donde se forja la representatividad nacional, como en el Congreso de la Unión, o donde se vela el respeto a las leyes y se protege a la Constitución, que es la Suprema Corte.

Poner en movimiento todo este vasto y complejo edificio institucional se presenta hoy vital para la salud democrática del país y del propio Estado. Los fiscales tienen que hacerse cargo de su responsabilidad y detener con razonamientos contundentes, asentados en la ley, las denuncias persecutorias, en tanto que el gobierno debe convocar a las comunidades epistémicas de la nación a una reflexión deliberativa sobre el futuro de sus quehaceres y las responsabilidades mutuas a las que se deben.

Hacer honor a la tradición fundada por Justo Sierra, José Vanconcelos, Gabino Barrera y muchos más en los albores del siglo XX, es misión obligada para los estudiosos de toda convicción, pero también compete al Estado y sus gobernantes que juraron respetar y proteger la Constitución Política.

El desatino ha llegado a tal punto de gravedad y vergüenza que no podemos sino hablar de bochorno e invocar por una reconciliación pronta. Hagámoslo ya.